

Campesinos e indígenas que marchan a Mocoa para encontrarse con otras movilizaciones.

Protestan contra acción de grupos armados y reprochan declaración de Putumayo como distrito minero.

Solo un fuerte aguacero detuvo a los más de 4.000 indígenas y campesinos de Putumayo que marchan hacia Mocoa, en protesta por la declaración del departamento como distrito minero, las «desproporcionadas» fumigaciones sobre «cultivos de seguridad alimentaria» y, al igual que en <u>el convulsionado Cauca</u>, para exigir la salida de los actores armados de sus territorios.

La marcha con arengas y escoltada por la Policía ya completó cinco días, desde su salida de Puerto Asís, y pernoctó este miércoles en los alrededores de Villa Garzón. Esperan llegar mañana viernes a Mocoa, donde se encontrarán con otra multitud.

«Nos preocupa el tema de las concesiones mineras. Para el Gobierno, el Putumayo ya no hace parte del Amazonas, sino que es un distrito minero; aquí no podemos titular y la tierra ya no es del campesino ni del indígena», le dijo a EL TIEMPO Marco Rivadeneira, líder campesino, quien agregó que rechazan las fumigaciones desproporcionadas, la erradicación manual y los 'falsos positivos'.

Durante la movilización, uno de los líderes indígenas repetía la siguiente consigna: «Rechazamos las estigmatizaciones de los medios que dicen que esta marcha es promovida por la guerrilla.

Nosotros los Nasa no necesitamos a ningún actor armado para salir a exigir nuestros derechos».

Jimmy Díaz, gobernador de Putumayo, afirmó que los indígenas y campesinos de la región que se están movilizando también exigen la presencia de veedores internacionales de derechos humanos y el desminado por parte de organismos internacionales de la frontera con Perú y Ecuador. Las minas son instaladas por el frente 48 de las Farc.

Hace dos meses más de 40 familias indígenas del municipio de San Miguel, frontera sur de Colombia, se vieron obligados a abandonar sus territorios luego de que dos niños fallecieron al pisar un campo minado.

Pero las razones de la marcha van más allá. El gobernador Díaz dijo que la situación para las comunidades afrodescendientes, indígenas y campesinas en el departamento se ha



complicado por la intervención hace un año de la EPS Salud Selva Salud, tras presentar un déficit de 11.000 millones de pesos.

«Hoy, pese a estar intervenida, esta EPS ya suma más de 52.000 millones de pesos de déficit. A pesar de que no puede operar, está más quebrada que antes y en esta región es la mayor prestadora de servicios de salud», aseguró el mandatario regional.

A esta situación se suma la intensificación de los ataques de las Farc contra campos petroleros del Putumayo. El más reciente atentado se registró el pasado dos de julio, en Puerto Caicedo, en donde murieron cinco civiles. El crimen fue condenado por la ONU.

REDACCIÓN NEIVA

http://www.eltiempo.com/colombia/otraszonas/ARTICULO-WEB-NEW NOTA INTERIOR-120 45362.html